



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

Buenos Aires, 13 de mayo de 2026.

**AUTOS:**

Para resolver **el planteo de nulidad** formulado en el presente incidente **CPE 1002/2016/TO1/84** por Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ, al que luego adhirió el Dr. Luis Fernando CHARRO (letrado defensor en la presente causa del mencionado imputado DAYÁN BARNATÁN) respecto de la resolución adoptada por este Tribunal Oral -el pasado 20 de noviembre de 2025- **que rechazó la aplicación de los beneficios del régimen de regularización excepcional previsto en ley 27.743** en el marco del Incidente CPE 1002/2016/TO1/70 -de acogimiento a la ley 27.743-, que corre por cuerda a la causa CPE 1002/2016/TO1 (int. 3025), caratulada "HWANG, Sung Ku y otros s/ inf. ley 22.415 y arts. 210 y 303 del CP" del registro del Tribunal,

**Y VISTOS:**

**I.** Previo a todo, debe recordarse que en el Incidente de acogimiento a la ley 27.743 -CPE 1002/2016/TO1/70-, con fecha 20 de noviembre de 2025, este Tribunal resolvió: "***I. NO HACER LUGAR*** a la aplicación de los beneficios del régimen de regularización excepcional previsto en ley 27.743, solicitada por la defensa del imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN, al cual adhirió la defensa del imputado Gabriel Norberto GARCÍA. Sin costas. ***II. TENER PRESENTES*** las reservas de casación y caso federal formuladas".

Dicha resolución, que no fue recurrida, había sido notificada -el mismo día 20/11/2025- al Fiscal General de Juicio, a la Querellante DGA, a la UIF y a los Sres. Defensores del nombrado DAYÁN BARNATÁN designados en la presente causa (Dres. CHARRO y BISBAL)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Mientras que el Dr. MORALES PRIVITERA se encuentra designado como abogado

**II.** Con fecha 26/11/2025, el imputado DAYÁN BARNATÁN (con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ) **planteó la nulidad** de la referida resolución -de fecha 20/11/2025- adoptada por este Tribunal Oral, por considerar que afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva.

Asimismo, **solicitó que se tramitara la acción declarativa de certeza constitucional promovida** en el expediente CAF 1478/2025 y que se suspendan los plazos procesales en la causa penal hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa no penal, porque -de lo contrario- se generaría un gravamen irreparable.

Al respecto, indicó que la referida acción declarativa "No se trató de una denuncia promovida por ARCA contra mi persona, sino por el contrario, de un proceso constitucional promovido por mi persona como sujeto activo contra ARCA que tiene por objeto dilucidar si cumplo con los requisitos exigidos por el art. 5 de la ley 27.743 -denominada ley de medidas fiscales paliativas relevantes- para obtener los beneficios emergentes del "Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social" en garantía de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e igualdad. En síntesis, promoví un proceso constitucional no penal que debe ser sustanciado como tal y que se vincula directamente con la causa penal que tramita ante el Tribunal Oral Penal Económico N° 2".

A su vez, en el escrito se manifestó que "... si el fuero en lo penal económico se declaró competente esto tampoco modificó la entidad del proceso constitucional promovido. Por dicho motivo, Tribunal Oral Penal Económico N° 2 debe hacerse cargo de su decisión de aceptar la competencia y tramitar la acción declarativa de certeza constitucional como un proceso no penal evitando adoptar decisiones jurisdiccionales que, sin



## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

*respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, resuelvan la cuestión planteada inobservando la debida imparcialidad e imparcialidad que deben honrar jueces y juezas. De lo contrario, estarían resolviendo inaudita parte o de oficio la cuestión de fondo planteada violando la garantía del debido proceso y obturando toda clase de recurso de revisión integral no penal. Queda lo suficientemente claro que la cuestión planteada como incertidumbre constitucional debe ser resuelta con carácter previo a la realización de la audiencia de debate oral y público debido a que se encuentra en juego los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e igualdad en relación al ejercicio del ius puniendi por parte del Estado".*

A su vez, se realizó un detalle de lo acontecido en el expediente CAF 1478/2025, iniciado en el fuero contencioso administrativo federal, por el cual promovieran la acción declarativa de certeza constitucional; como también se detalló lo ocurrido en el mencionado incidente CPE 1002/2016/TO1/70, de acogimiento a la ley 27.743, que fue resuelto por este Tribunal Oral con fecha 20/11/2025.

En relación al expediente CAF 1478/2025, DAYÁN BARNATÁN (con el patrocinio letrado del Dr. GIL DOMÍNGUEZ) sostuvo que "... desde la llegada digital del expediente (28/02/2025), el tribunal no despachó absolutamente nada. Ni las peticiones en derecho, ni los cuatro prontores despachos, pero más grave aún, es que el último escrito fue archivado sin ninguna clase de fundamento. Esta situación configura una denegación de justicia por omisión, prohibida constitucionalmente, por cuanto genera: incertidumbre jurídica, afectación del derecho de defensa, violación del art. 18 de la Constitución argentina en su faz procesal y un

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

*obstáculo ilegítimo para el acceso efectivo al remedio constitucional intentado" y "Sostener un debate penal sin antes resolver si el imputado está o no amparado por un régimen de regularización excepcional válidamente invocado, implica avanzar sobre un edificio procesal sin verificar si sus cimientos existen. Las consecuencias son graves. Se arriesga a que el juicio oral se construya sobre una base jurídica inexistente. Se expone a que el ius puniendi sea ejercido sin verificar previamente si se encuentra constitucionalmente habilitado. Se genera un dispendio jurisdiccional innecesario. Se afecta la igualdad de armas procesal".*

Todo ello, por los fundamentos de hecho y de derecho que aquí se dan por reproducidos.

**III.** Ante ello, por presidencia del Tribunal se ordenó<sup>2</sup> poner en conocimiento de esa presentación a los letrados defensores de Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN designados en la presente causa (Dres. Luis Fernando CHARRO, Alejandro BISBAL y Pablo MORALES PRIVITERA), a los efectos que estimen corresponder.

El Dr. CHARRO, en su carácter de abogado defensor del imputado DAYÁN BARNATÁN, se adhirió a la petición realizada por su asistido junto a su letrado patrocinante, Dr. GIL DOMÍNGUEZ.

A su vez, indicó que "Considero respetuosamente que el escrito en responde habrá de ser despachado en el expediente CAF en el que fue presentado, por cuanto refiere a la cuestión que ha sido sometida a la judicatura en dicho expediente, así lo propongo a resolución del Excmo. Tribunal".

Al respecto, expresó que "estamos ante la instauración de una acción específica con un procedimiento reglado también específico que debe ser resuelta conforme a las normas que la regulan, mas en modo alguno omitir todo



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

*pronunciamiento bajo el argumento que estamos ante un fuero distinto, con un régimen procesal también distinto. Incluso, el régimen recursivo es también distinto por cuanto de adverso, se estaría violentando la normativa preestablecida para este tipo de acciones".*

Ello, por los argumentos que aquí se tienen presentes.

**IV.** Que, corrida la vista a la querellante Dirección General de Aduanas, la Dra. Jimena GALLARDO, luego de hacer una reseña del marco jurídico de las nulidades y de remitirse a lo expuesto por el Fiscal en el expediente administrativo CAF 1478/2025, manifestó que "la acción declarativa de certeza, debe ser rechazada por resultar procesalmente inhábil, por haber sido el planteo ya resuelto en la sede en la cual se pretende su sustanciación, y por no resultar viable reiterar la resolución de una pretensión ya rechazada. Esto conlleva a concluir que, la acción declarativa de certeza deviene en un accionar dilatorio y reiterado para intentar un nuevo análisis de un pedido de extinción de la acción ya resuelto. Por lo expuesto, se solicita se rechace el planteo de nulidad de la defensa, con costas, por ser un remedio procesal meramente dilatorio, que pretende desnaturalizar la acción principal, basándose en una indebida invocación de la competencia que corresponde al fuero contencioso-administrativo".

**V.** A su turno, en representación de la Unidad de Información Financiera, el Dr. Mariano GALPERN, luego de hacer un detalle de la calificación legal de los hechos imputados a DAYÁN BARNATÁN, sostuvo que "Los hechos imputados que integran esa pieza procesal no generaron 'perjuicio fiscal', sino que se les imputa que habrían simulado operaciones de importación

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

con la finalidad de obtener 'beneficios' económicos. De acuerdo con lo expuesto, la acción declarativa de certeza no operaría en este caso porque no hay incertidumbre acerca de la correspondencia en la aplicación del Régimen de Regularización de Activos, se ha corroborado que los hechos investigados no tuvieron por objeto evitar el pago de tributos, sino la vulneración del control aduanero mediante la simulación de operaciones de importaciones que jamás se concretaron".

**VI.** Al continuar con la sustanciación, el Fiscal General, Dr. Diego VELASCO, consideró que el planteo de nulidad partía de una premisa errónea al entender que el Tribunal habría omitido brindar tutela judicial efectiva a lo solicitado, cuando nada de ello ocurrió. Al respecto, indicó que "La tutela judicial efectiva (en su dimensión constitucional) no garantiza un pronunciamiento favorable a la pretensión de la parte, sino el acceso a una decisión jurisdiccional razonada, dictada por juez competente y con respeto al debido proceso. Ese estándar fue plenamente satisfecho".

Así también, manifestó que tampoco se verificó un agravio actual ni perjuicio irreparable, pretendiendo reconfigurar como nulidad lo que, en rigor, era un desacuerdo con el criterio adoptado por el Tribunal en la resolución de fecha 20/11/2025 y ello no constituía causal de invalidez procesal.

En relación al pedido de acción declarativa de certeza, el Fiscal General sostuvo que "no existe incertidumbre jurídica actual. La cuestión que la defensa pretende someter a 'certeza' (esto es, la supuesta procedencia de los beneficios de la ley 27.743) ya fue objeto de un pronunciamiento jurisdiccional expreso por parte de este Tribunal, que rechazó fundadamente dicha aplicación. No hay estado de duda pendiente: hay una decisión judicial vigente".



## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

En la misma línea, señaló que la acción declarativa resultaba manifiestamente improcedente por su carácter subsidiario y, a su vez, *"la acción intentada no puede ser utilizada como mecanismo indirecto de control abstracto, ni como herramienta para desplazar procedimientos ordinarios, ni para obtener pronunciamientos teóricos o consultivos"*.

Por último, indicó que aquel planteo carecía de objeto actual, ya que lo que se pedía declarar ya había sido decidido; resultando abstracta, carente de finalidad procesal legítima y ajena al presupuesto de procedencia establecidos por la CSJN.

Todo ello, por los fundamentos de hecho y de derecho que aquí se tienen presentes.

**VII.** Por último, en fecha 17/12/25, se hizo saber a las partes que se había finalizado con la sustanciación del presente, sin que las partes hayan hecho alguna manifestación posterior, por lo que corresponde que este Tribunal se pronuncie sobre el planteo efectuado.

Importa precisar que, con fecha 23/12/2025, el Tribunal -por mayoría- resolvió apartar a la Unidad de Información Financiera para seguir interviniendo como parte querellante, y luego -por unanimidad- se concedió el recurso de casación interpuesto contra dicha resolución; recurso que -de acuerdo a lo establecido en el art. 442 del C.P.P.N.- tiene efecto suspensivo, por lo que -al menos por el momento- no corresponde hacer efectivo el referido apartamiento (en forma similar ya se pronunció el Tribunal -por presidencia- en la presente causa, en los incidentes CPE 1002/2016/TO1/85<sup>3</sup> y CPE 1002/2016/TO1/82<sup>4</sup>).

---

<sup>3</sup> de fecha 5/02/2026.

Fecha de firma: 13/05/2026<sup>4</sup> de fecha 25/03/2026.

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

**Y CONSIDERANDO:**

**El Dr. Ignacio Carlos FORNARI dijo:**

1. A fin de dar respuesta al planteo realizado, entiendo necesario realizar un breve racconto de lo sucedido en las respectivas actuaciones:

**a) Expediente CAF 1478/2025:**

➤ el expediente se inició por una presentación realizada por el imputado DAYÁN BARNATÁN con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ, quienes promovieron una **acción declarativa de certeza constitucional** ante el fuero contencioso administrativo federal, cuyo objeto era "... dilucidar la siguiente incertidumbre constitucional: ¿En el marco de la causa 'Terrasur Inversiones SA y otros s/ infracción ley N° 22.415' (Expediente 1002/2016) que tramita ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, cumplo con los requisitos exigidos por el art. 5 de la ley 27.743 -denominada ley de medidas fiscales paliativas relevantes- para obtener los beneficios emergentes del 'Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social' en garantía de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e igualdad?..."<sup>5</sup>.

➤ Luego de haber sido desinsaculada por sorteo, la Sra. Jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 ordenó corrió vista al Fiscal Federal, a fin de que se expida respecto de la competencia y la habilitación de la instancia<sup>6</sup>.

➤ El Fiscal Federal, Dr. Fabián Omar CANDIA, dictaminó que "... lo perseguido en autos se vincula de modo directo e inmediato con la causa 'Terrasur Inversiones S.A. y otros s/ infracción Ley 22.415' (Expediente 1002/2016) que tramita ante

---

<sup>5</sup> Los destacados son del presente.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

*la Justicia Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, más concretamente Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2". En consecuencia, postuló que se declare la incompetencia a este fuero en lo penal económico, al explicar que "no corresponde, por regla, que un magistrado ingrese a conocimiento de un asunto que tramitó ante otro juez (C.S.J.N., Fallos 308:864 y 1726). La intervención de otro juez implicaría una inadecuada intromisión en la órbita de conocimiento del primero, quien como director del proceso... puede válidamente pronunciarse sobre su situación jurídica, por encontrarse a su orden (confr. Mutatis mutandis, C.S.J.N., Fallos: 327:2862 y 3527 y 330:159 y 4071, entre otros)..."*<sup>7</sup>.

➤ Seguidamente, la Sra. Jueza resolvió de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía Federal -al compartir los fundamentos expuestos, a los que se remitió- por lo que dispuso declarar la incompetencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 para conocer en la causa y atribuir su conocimiento a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, remitiendo el mencionado expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico<sup>8</sup>.

➤ Cabe destacar que dicha resolución fue expresamente consentida por Lázaro DAYÁN BARNATÁN, mediante escrito que presentó -con fecha 27/2/2025- con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ<sup>9</sup>.

➤ Una vez recibida, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico procedió al sorteo del expediente CAF

---

<sup>7</sup> dictamen de fecha 18/02/2025.

<sup>8</sup> resolución de fecha 25/2/2025.

<sup>9</sup> con fecha 27/02/2025 indicó que "vengo a consentir la decisión jurisdiccional notificada el 25 de febrero de 2025 y a solicitar la urgente remisión del expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico de la

1478/2025, que resultó desinsaculado el Juzgado Penal Económico N° 3.

➤ Con fecha 5/03/2025, DAYÁN BARNATÁN (con el patrocinio letrado del Dr. GIL DOMÍNGUEZ) procedió a recusar sin causa al Sr. Titular del Juzgado Nacional Penal Económico N° 3, invocando el art. 14 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

➤ Ante ello, luego de realizarse una certificación actuarial respecto a la causa N° CPE 1002/2016, caratulada "TERRASUR INVERSIONES S.A." que tramitaba en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, el titular del referido Juzgado Penal Económico N° 3 -con fecha 5/3/2025- dispuso: "Con relación a la presentación efectuada por Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN, por derecho propio y junto con su letrado patrocinante, en cuanto por aquélla promovió la recusación del suscripto sin expresión de causa en los términos de los arts. 14 y ccdtes. del C.P.C.C.N., corresponde expresar que en tanto el planteo fue realizado bajo una prerrogativa procedimental ajena a la que rige la normativa adjetiva aplicable a la competencia adjudicada a este órgano jurisdiccional, ante el cual fue interpuesto, aquél no puede tener acogida favorable. Por lo que, por lo expresado, corresponde su RECHAZO IN LIMINE, LO QUE ASÍ SE RESUELVE. **Por otra parte, la procedencia o no del acogimiento en los términos de la ley 27.743 invocado en este caso por Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN, por ser un tema relacionado con la vigencia o no de la acción penal ligada a la deuda objeto de aquella regularización, es competencia del órgano jurisdiccional ante cual tramita la imputación penal cuya acción se pretende suspender o extinguir;** por lo tanto, corresponde remitir los presentes actuados al Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, en tanto aquéllos son los estrados ante los cuales se encuentra en trámite la situación procesal del mencionado DAYÁN BARNATÁN". Todo ello fue debidamente

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

notificado a DAYÁN BARNATÁN y su letrado patrocinante, que no hicieron otra manifestación ante ese Juzgado.

➤ Con fecha 13/03/2025, LÁZARO DAYÁN BARNATÁN se presentó ante este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 (con el patrocinio letrado del Dr. GIL DOMÍNGUEZ) a efectos de manifestar que el proceso constitucional promovido *"tiene por objeto dilucidar si cumpla con los requisitos exigidos por el art. 5 de la ley 27.743"* y, entre otras cosas, solicitó que la cuestión planteada *"debe ser resuelta con carácter previo a la realización de la audiencia de debate oral y público"*.

➤ Una vez recibido en este TOPE 2, por un mejor orden procesal, por presidencia se decidió -en las actuaciones principales- **incorporar copia del expediente CAF 1478/2025 al incidente de extinción de la acción CPE 1002/2016/TO1/70**, para continuar proveyendo allí cuanto corresponda; toda vez que en ese entonces dicho incidente se encontraba en pleno trámite y justamente había sido iniciado por uno de los defensores del imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYAN BARNATÁN presentados en la presente causa (Dr. Alejandro Daniel BISBAL), con el objeto de analizar una posible solución alternativa en los términos de la ley 27.743.

Asimismo, en el incidente CPE 1002/2016/TO1/70, se indicó expresamente que el referido expediente CAF 1478/2025 *"guarda estrecha relación con la presentación efectuada por la defensa del imputado DAYÁN BARNATÁN en el marco de la presente incidencia"*, por lo que también se dispuso que *"tome conocimiento la defensa técnica del imputado de mención, Dres. Luis Fernando CHARRO, Pablo MORALES PRIVITERA y Alejandro Daniel BISBAL, a los efectos que estimen corresponder"*.

---

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

➤ A su vez, se deja constancia que DAYÁN BARNATÁN (con el patrocinio letrado del Dr. GIL Domínguez) hizo presentaciones en el referido expediente CAF 1478/2025 -con fechas 7/08/2025, 19/11/2025 y 27/11/25-, **que fueron agregadas al incidente de acogimiento CPE 1002/2016/TO1/70** y proveídas en dicho legajo con fechas 24/09/2025, 19/11/2025 y 27/11/25 -respectivamente-, en las que expresamente se hizo saber al imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN -a través de los defensores que él mismo había designado en la presente causa- *"... que no puede ser defendido simultáneamente por más de dos abogados particulares de confianza -además del abogado sustituto- (art. 105 del C.P.P.N.), por lo que -en lo sucesivo- en las presentaciones que quiera formular deberá estar representado por los abogados designados en la presente causa..."*.

**b) Incidente CPE 1002/2016/TO1/70, de extinción de la acción penal por acogimiento a la ley 27.743:**

➤ el incidente se inició a raíz de la presentación realizada -con fecha 28/11/2024- por el Dr. Dr. Alejandro D. BISBAL (letrado defensor de Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN en la presente causa), quien solicitó que se requiriera a la Dirección General de Aduanas que determine el monto que correspondería ingresar al fisco nacional en concepto de tributos adeudados respecto a DAYÁN BARNATÁN, con el objeto de analizar una posible solución alternativa en los términos de la ley 27.743.

➤ En consecuencia, por presidencia del Tribunal (con una integración diferente a la actual) se ordenó formar incidente de extinción de la acción penal y se libró el oficio requerido a la Dirección General de Aduanas; que fue oportunamente proveído.



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

Luego de ello, se realizó la debida sustanciación del planteo incidental efectuado por la defensa de DAYÁN BARNATÁN.

Asimismo, con fecha 16/4/2025, en el referido incidente CPE 1002/2016/TO1/70 se dejó constancia que se había **agregado copia del expediente CAF 1478/2025**, que -según se indicó en el decreto- *"guarda estrecha relación con la presentación efectuada por la defensa del imputado DAYÁN BARNATÁN en el marco de la presente incidencia"* (formada en autos justamente para determinar si correspondía extinguir la acción penal del imputado DAYÁN BARNATÁN en los términos de la ley 27.743), por lo que se dispuso que *"tome conocimiento la defensa técnica del imputado de mención, Dres. Luis Fernando CHARRO, Pablo MORALES PRIVITERA y Alejandro Daniel BISBAL, a los efectos que estimen corresponder"*.

Con fecha 6/10/2025, por presidencia se hizo saber a las partes que había concluido la sustanciación del planteo de extinción de la acción penal en los términos de la ley 27.743, por lo que el Tribunal pasaría a resolver el planteo realizado.

Con fecha 20/11/2025, **este Tribunal Oral resolvió no hacer lugar a la aplicación de los beneficios del régimen de regularización excepcional previstos en la ley 27.743 solicitada por la defensa del imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN** (por los argumentos allí sostenidos, a los que cabe remitirse). Dicha resolución fue debidamente notificada a las partes, y no fue recurrida.

Con fecha 26/11/2025, el imputado DAYÁN BARNATÁN (con el patrocinio letrado del Dr. GIL DOMÍNGUEZ) presentó el planteo de nulidad contra la referida resolución de fecha 20/11/2025 y, en el mismo escrito, solicitó que este Tribunal

Oral tramitara la acción declarativa de certeza constitucional oportunamente promovida (ver punto II del presente).

2. Sentado ello, debe recordarse que la nulidad procesal refiere a una irregularidad grave y trascendente que evidencia determinada actividad procesal que por ello se cuestiona, es decir, a la verificación de un incumplimiento a las formas sustanciales que se traduce en un vicio generador de un perjuicio concreto para el que lo invoca, que será susceptible de convalidación o no, según el caso, con los efectos que a ello le asigna la ley procesal.

En ese orden de ideas, sostiene Pessoa que es posible postular un fundamento constitucional de las nulidades procesales que justifica la invalidación de la actividad procesal defectuosa, que se apoya -por un lado- en el aseguramiento de la efectiva vigencia del debido proceso legal y, por otro, en el aseguramiento de la efectiva vigencia de la regla de la defensa en juicio del imputado especialmente<sup>10</sup>.

Establecido ello, es pertinente recordar que en el análisis de las causales de nulidad debe imperar un criterio restrictivo (art. 2 del C.P.P.N.). Al respecto, el Máximo Tribunal ha sostenido que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (Fallos: 295:961, 298:312, 302:221, 306:149 y 1360, 310:1880, 311:1413 y 2337, 323:929, entre otros. En el mismo sentido, C.N.C.P., Sala IV, "Piromalli, Pascual", Reg. 822 y Cámara Penal Económico, Sala B, Regs. 501/2000, 671/2000, 152/2002 y 311/2003, entre otros).

Así, para la invalidación pretendida debe verificarse la afectación de un derecho constitucional, causando un

---

<sup>10</sup> Cfr. Pessoa, Nelson R., *La nulidad en el proceso penal*, Ed. Mave, Bs.



## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

efectivo perjuicio, lo que implica la acreditación del concreto daño que pudo inferirle el presunto vicio de procedimiento y la demostración de cómo hubiera influido en el caso concreto, si no hubiera existido ese defecto.

En esa dirección, tal como destacan Navarro y Daray, acorde con los principios de conservación y trascendencia, las nulidades (sean expresas, genéricas, virtuales, relativas o incluso las absolutas) no deben ser declaradas si el vicio del acto no le ha impedido lograr su finalidad o si no media interés jurídico que reparar, esto es, si no existe un perjuicio efectivo<sup>11</sup>.

Por último, importa recordar que para declarar la nulidad de un acto es necesario cumplir con ciertas exigencias, entre ellas, la demostración -por parte de quien la alega- del perjuicio real y concreto que le produce el acto viciado.

3. Sentado cuanto precede, corresponde adelantar que el planteo de nulidad interpuesto no tendrá acogida favorable.

a) En primer lugar, porque no se verificó un incumplimiento a las formas sustanciales de procedimiento.

Pues bien, debe recordarse que el expediente CAF 1478/2025 se inició con **una acción declarativa de certeza** presentada por DAYÁN BARNATÁN, que tenía como objeto dilucidar si "... ¿En el marco de la causa 'Terrasur Inversiones SA y otros s/ infracción ley N° 22.415' (**Expediente 1002/2016**) que tramita ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, cumplo con los requisitos exigidos por el art. 5 de la **ley 27.743** -denominada ley de medidas fiscales

---

<sup>11</sup> Guillermo Navarro y Roberto R. Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Hammurabi, año 2013, tomo I, pág. 639.

paliativas relevantes- para obtener los beneficios emergentes del "Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social" en garantía de los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad e igualdad?..."<sup>12</sup>. A su vez, en esa misma presentación, indicaron que "... Queda lo suficientemente claro que la cuestión planteada como incertidumbre constitucional debe ser resuelta con carácter previo a la realización de la audiencia de debate oral y público..."<sup>13</sup>.

Además, tampoco se puede soslayar que -en ese entonces- la presente **causa 1002/2016 "Terrasur"** (referida en la acción declarativa de certeza) ya había sido elevada a este Tribunal Oral, donde incluso tramitaba -a instancias del pedido efectuado por la propia defensa del imputado DAYÁN BARNATÁN- el incidente de extinción de la acción penal **CPE 1002/2016/TO1/70**, a los efectos de verificar si resultaba aplicable la ley 27.743.

En tales condiciones, y como se explicó, por presidencia se decidió agregar copia del expediente CAF 1478/2025 al referido incidente de falta de acción CPE 1002/2016/TO1/70, con el debido conocimiento de todas las partes intervinientes en dicho incidente.

Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el punto 1.b) de mi voto, el incidente de excepción de falta de acción CPE 1002/2016/TO1/70 fue debidamente sustanciado<sup>14</sup> y luego resuelto por **este Tribunal Oral** con fecha 20/11/2025, que **decidió rechazar el planteo para aplicar al imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN los beneficios del régimen de regularización excepcional previsto en ley 27.743.**

---

<sup>12</sup> Los destacados son del presente.

<sup>13</sup> Los destacados son del presente.

<sup>14</sup> Incluso, debe recordarse que -con fechas 6/10/2025 y 19/11/2025- se hizo saber a las partes, y particularmente a la defensa de DAYÁN BARNATÁN, que se había finalizado con la sustanciación de la cuestión planteada en el incidente de extinción de la acción CPE 1002/2016/TO1/70, por lo que se pasaba a despacho para ser resuelto por el Tribunal (sin que la defensa ni las demás partes posteriormente hayan hecho alguna manifestación en





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

O sea, que mediante ese pronunciamiento jurisdiccional -por un lado- se aventó la falta de certidumbre del imputado DAYÁN BARNATÁN con respecto a si cumplía -o no- con los requisitos exigidos por la ley 27.743 para acceder a sus beneficios.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que el ordenamiento procesal penal aplicable contempla una vía específica para canalizar los pedidos de acogimiento a los regímenes de regularización excepcionales que -como la ley 27.743- determinan la suspensión o extinción de la acción penal, que es la excepción de falta de acción; cuyo procedimiento de ningún modo puede considerarse ineficaz para garantizar el respectivo pronunciamiento jurisdiccional.

En efecto, el art. 358 del C.P.P.N. determina que *"Antes de fijada la audiencia para el debate, las partes podrán deducir las excepciones que no hayan planteado con anterioridad..."*; mientras que el art. 339 establece que *"... las partes podrán interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento:... 2º) Falta de acción, porque no se pudo promover o no fue legalmente promovida, o no pudiere ser proseguida, o estuviere extinguida la acción penal"* y el art. 340 regula el trámite, al establecer que *"Las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente separado... se correrá vista al ministerio fiscal y demás partes"*.

En el presente caso, el Tribunal efectivamente cumplió con el procedimiento previsto por el Código Procesal Penal aplicable, formando el referido incidente de extinción de la acción (con el pedido que había efectuado el defensor designado por DAYÁN BARNATÁN en la presente causa), en el que se le dio la posibilidad a las partes de ser escuchadas en forma previa a que este Tribunal se expida, para luego -al

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

haber concluido la sustanciación- pasar a **resolver la petición efectuada en forma previa al juicio oral y público.**

Sentado ello, debe recordarse -como indicó el Sr. Fiscal General- que **la acción declarativa de certeza tiene carácter subsidiario**, por lo que no puede ser utilizada para desplazar los procedimientos ordinarios previstos por la legislación.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó "... que la acción de certeza promovida por la actora resulta improcedente, ya que el arto 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación asigna a dicha acción carácter subsidiario (conf. Fallos: 305: 1715). Ese **carácter subsidiario obsta a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la cuestión**, y que permiten aventar la falta de certidumbre, tal como ocurre en el caso en atención a los mecanismos establecidos en la citada ley de procedimientos... Esta conclusión se impone en el sub examine en tanto no concurren razones que demuestren que los aludidos procedimientos resulten ineficaces para tal finalidad o que la sujeción a ellos conculque derechos de raigambre constitucional"<sup>15</sup>.

En el presente, el carácter subsidiario de la acción declarativa de certeza claramente impedía desplazar los procedimientos ordinarios existentes, que contemplaban un mecanismo específico e idóneo para disipar el estado de incertidumbre invocado.

En efecto, mediante la referida resolución de fecha 20/11/2025, este Tribunal Oral -con pleno respeto del debido proceso, del derecho de defensa en juicio y en forma previa al debate oral- de manera fundada explicó los motivos por los que consideraba que el imputado DAYÁN BARNATÁN no cumplía con los

---

<sup>15</sup> CSJN, "Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción

Fecha de firma: 13/05/2026 meramente declarativa", Fallos: 343:560, del 25/02/2014.

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO



## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

requisitos exigidos por la ley 27.743 en la presente causa CPE 1002/2016 "Terrasur".

En función de todo lo expuesto, queda descartado cualquier incumplimiento por parte de este Tribunal Oral a las formas sustanciales de procedimiento.

**b)** En segundo lugar, tampoco se encuentra configurado un **perjuicio real, actual y concreto** que se le haya ocasionado al imputado.

Debe recordarse que la defensa señaló que se había afectado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, se coincide plenamente con lo señalado por el Sr. Fiscal General cuando explicó que la "tutela judicial efectiva (en su dimensión constitucional) no garantiza un pronunciamiento favorable a la pretensión de la parte, sino el acceso a una decisión jurisdiccional razonada, dictada por juez competente y con respeto al debido proceso. Ese estándar fue plenamente satisfecho".

Pues bien, como ya se vio, este Tribunal -luego de realizar la debida sustanciación- en el marco del incidente de extinción de la acción CPE 1002/2016/TO1/70 resolvió -con fecha 20/11/2025- rechazar el pedido de aplicar al imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN los beneficios del régimen de regularización excepcional previsto en ley 27.743.

En tales condiciones, la mera disconformidad del imputado con lo resuelto por este Tribunal Oral de ningún modo autoriza a descalificar la validez de la resolución adoptada.

Además, tampoco se advierte afectación alguna al debido proceso legal ni al derecho de defensa en juicio, ya que -como antes se explicó- la cuestión fue resuelta luego de haber sido debidamente sustanciada e incluso fue resuelta con

anterioridad a la realización del juicio oral (tal como había peticionado el imputado).

En función de todo lo expuesto, tampoco se advierte lesión a garantías constitucionales, como invoca la defensa, por lo cual se descarta la configuración de un **perjuicio concreto ni actual**.

Como se vio, mediante un pronunciamiento jurisdiccional -debidamente sustanciado en forma previa- este Tribunal Oral explicó las razones por las que el imputado DAYÁN BARNATÁN no cumplía -en la presente causa 1002/2016- con los requisitos exigidos por la ley 27.743 para acceder a sus beneficios de suspensión o extinción de la acción penal.

En tales condiciones, no se aprecia la existencia de un estado de incertidumbre jurídica actual que requiera tutela.

En suma, a criterio del suscripto, los extremos esgrimidos de ningún modo demuestran la existencia de un apartamiento a las normas de procedimientos aplicables y, menos aún, que se haya ocasionado un perjuicio concreto y real al imputado, motivo por el cual, corresponde rechazar el planteo de nulidad, con costas.

**4.** Sin perjuicio de lo expuesto, encuentro necesario realizar una consideración final en virtud de lo expresado por el imputado DAYÁN BARNATÁN, con el patrocinio letrado del Dr. GIL DOMÍNGUEZ, respecto a que este Tribunal Oral no había despachado absolutamente nada desde la llegada del expediente CAF 1478/2025.

Al respecto, debe recordarse que **en esa misma causa CAF 1478/2025**, el Sr. Titular del Juzgado Penal Económico N° 3 ya les había notificado<sup>16</sup> expresamente que la procedencia o no del acogimiento en los términos de la ley 27.743 -invocada por Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN- era un tema relacionado con la vigencia o no de la acción penal ligada al

---

Fecha de firma: 13/05/2026<sup>16</sup> Conforme decreto de fecha 5/3/2025 y su notificación.

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

objeto de aquella regularización, por lo que ni bien se recibió en este Tribunal Oral el respectivo expediente CAF 1478/2025 (iniciado por la acción declarativa de certeza) por presidencia se decidió incorporarlo al **incidente de extinción de la acción penal CPE 1002/2016/TO1/70**, que en ese entonces se encontraba en pleno trámite y justamente había sido iniciado por uno de los defensores del imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN presentado en la presente causa (Dr. Alejandro Daniel BISBAL), con el objeto de analizar una posible solución alternativa en los términos de la ley 27.743.

Asimismo, y a diferencia de lo afirmado por el imputado y su letrado patrocinante, importa recordar que cada una de las presentaciones que hicieron en el expediente CAF 1478/2025, fueron oportunamente agregadas y proveídas en el incidente CPE 1002/2016/TO1/70, con el debido conocimiento de los abogados defensores de confianza designados por el propio imputado en la presente causa, y de las demás partes intervinientes en el incidente.

5. Por los mismos argumentos ya expuestos en los puntos precedentes, teniendo en consideración que este Tribunal Oral -con la debida sustanciación previa, respetando el derecho de defensa en juicio y el debido proceso- ya resolvió (en el marco del incidente de extinción de la acción penal, que es la vía específicamente prevista por la legislación procesal aplicable para canalizar esos planteos) que el imputado no cumplía con los requisitos exigidos por la ley 27.743 para acceder a sus beneficios; es que no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento respecto a ello, como solicitó el imputado DAYÁN BARNATÁN.

6. En virtud de todo lo expuesto, entiendo que corresponde: **a) rechazar el planteo para que se declare la**

Fecha de firma: 13/05/2026

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO

nulidad de la resolución de este Tribunal Oral de fecha 20/11/2025, deducida por el imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ, al que luego adhirió el Dr. Luis Fernando CHARRO (letrado defensor en la presente causa del mencionado imputado DAYÁN BARNATÁN), con costas; **b)** no hacer lugar al pedido para que este Tribunal Oral emita un nuevo pronunciamiento con respecto a si el nombrado cumple con los requisitos exigidos por la ley 27.743; **c)** así como tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Así voto.

**El Dr. Diego García Berro dijo:**

1. Que, en primer lugar, aclaro que, sin perjuicio de mi opinión personal vertida en mi inhibición de fecha 16/10/2025 (que dejo expresamente a salvo), en función de lo resuelto en fecha 22/12/2025 y lo dispuesto posteriormente por presidencia en la misma fecha (en cuanto a la no elevación a la Cámara Federal de Casación Penal del rechazo de dicha inhibición), corresponde que me expida en la presente.

2. Que, en consecuencia, sobre el planteo de nulidad de la resolución de fecha 20/11/2025 (en la que no intervine) y sobre el pedido formulado para que este Tribunal emita un nuevo pronunciamiento con respecto a si el imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN cumple con los requisitos exigidos por la ley 27.743, por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos del voto que lidera el acuerdo, comparto también sus conclusiones y me expido en el mismo sentido.

Así voto.

**La Dra. Sabrina Namer dijo:**

---

*Fecha de firma: 13/05/2026*

*Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO*



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONÓMICO 2

CPE 1002/2016/TO1/84

Que, por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos esgrimidos por el Dr. FORNARI, adhiero a sus conclusiones.

Así voto.

Por todo ello, el Tribunal;

**RESUELVE**

**I. NO HACER LUGAR** al planteo para que se declare la nulidad de la resolución de este Tribunal Oral de fecha 20/11/2025, deducida por el imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés GIL DOMÍNGUEZ, al que luego adhirió el Dr. Luis Fernando CHARRO (letrado defensor en la presente causa del mencionado imputado DAYÁN BARNATÁN), con costas (arts. 166 -interpretado "a contrario sensu", 167, 168, 171, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

**II. NO HACER LUGAR** al pedido para que este Tribunal Oral emita un nuevo pronunciamiento con respecto a si el imputado Lázaro Elías Maximiliano DAYÁN BARNATÁN cumple con los requisitos exigidos por la ley 27.743.

**III. TENER PRESENTE** la reserva del caso federal efectuada.

Diego GARCÍA BERRO  
Juez de Cámara

Sabrina NAMER  
Juez de Cámara

Ignacio Carlos FORNARI  
Juez de Cámara

ante mi

Secretario

---

*Fecha de firma: 13/05/2026*

*Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: DIEGO GARCIA BERRO, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: SABRINA EDITH NAMER, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: FEDERICO MAGNANI, SECRETARIO DE JUZGADO*